

## PENSANDO EN VOZ ALTA (A MANERA DE CONCLUSIONES)

EL PAÍS QUE HOY CONOCEMOS es uno que no esperábamos a fines de la década de los setenta, cuando se diseñó la reforma política de la transición. El campo político-ideológico se ha reconfigurado en un sentido absolutamente distinto del que fuera pensado y proyectado en aquel entonces por partidos políticos de todos los signos, gobiernos y fuerzas sociales.

Dos rasgos fundamentales, entre otros, han caracterizado hacia el final del siglo XX la faz política de la sociedad ecuatoriana. Por una parte, la vigencia de los liderazgos personalistas y la política de la identificación. Tales liderazgos –aunque se pretendió exorcizarlos mediante la reforma política de 1979– permanecían latentes en el seno de la sociedad, recibiendo un fuerte aliento institucional a partir de la reforma política de 1994 que consagró las candidaturas “independientes”, y re-emergiendo cada vez con más fuerza. En otra vertiente, igualmente significativa, un enorme aporte a la mudanza de la faz política de la sociedad ecuatoriana ha sido entregado por la acción y presencia de fuerzas constantemente movilizadas, tales como las de indígenas-campesinos, que han contribuido a transformar el imaginario político nacional, deconstruyendo abyecciones heredadas del coloniaje y el patriarcalismo (la movilización de las mujeres requiere pautas de análisis muy peculiares, por lo que no ha podido ser abordada en el contexto del presente trabajo). Hoy en día, por ejemplo, no nos ima-

ginamos unas instancias de representación política “desgenerizadas” o “desetnicizadas”. A su vez, la constancia de la movilización de los sujetos laboral y estudiantil ha contribuido a frenar la aceleración del ajuste, preservando márgenes mínimos para el acceso de las mayorías a los derechos sociales.

Ahora bien, si la política de la identificación ha representado la faceta conservadora de la ideología política, la movilización y crítica ha configurado procesos de democratización de la política y de la sociedad, que no obstante no son unívocos ni lineales. Así pues, la propia composición de las elites políticas en nuestro país ha sufrido una transformación significativa, pues éstas ya no pueden ser vistas solamente a través de imágenes masculinas, occidentales, blancas y urbanas, y tal circunstancia contribuiría, a su vez, al remozamiento y oxigenación de los modos de dominación política y la explotación. Es por ello que los procesos de “democratización” han tenido también un desdoblamiento adverso: la absorción de los antiguos liderazgos de la protesta, y la cooptación de las cabezas más visibles. Y una parcela de tales líderes –varones y mujeres, indígenas y mestizos– se han allanado a la “inclusión”, la misma que ahora sería una plausible –y oportuna– enmienda de “exclusiones” históricas<sup>1</sup>.

Es en ese camino y también en la ausencia de propuestas viables y consensuadas sobre un modelo de sociedad alternativo al modelo de ajuste, que el ciclo político de los años noventa y, en particular, la coyuntura de intensificación del ajuste y de la protesta –una mediana duración, en los términos de Braudel– nos presenta un desenlace desprovisto de una negociación real sobre el modelo económico y social desde las fuerzas críticas al neoliberalismo. Por otro lado, es menester recordar la nueva configuración de la toma de decisiones políticas, donde al Estado, interlocutor de los sujetos de la protesta, le cabe un papel cada vez menos importante, en la medida en que ellas se toman en instancias supranacionales. La protesta en este sentido tendría efectos limitados, pues parecería una débil voz y acción perdida en un inmenso espacio donde es prácticamente inaudible, enfrentando a un “tigre de papel” (los resultados de la confluencia de fuerzas antineoliberales en el Foro Social Mundial serán inteligibles y palpables solo a mediano plazo).

---

<sup>1</sup> Vakaloulis llama la atención sobre las dificultades que tiene el concepto de “exclusión” para “funcionar como tema de reflexión política”, la misma que implicaría “desnaturalizar el curso del mundo, estudiar las estrategias de los actores sociales y la manera como estos construyen y defienden sus intereses, analizar rigurosamente las relaciones de fuerza entre ellos, establecer responsabilidades en la conducta de los asuntos comunes en los niveles regional, nacional y transnacional” (Vakaloulis, 1999). En esta lógica de la exclusión, según el razonamiento de ese autor, problemas como el desempleo serían considerados patógenos y no como un mecanismo de la reestructuración de clase.

Durante el ciclo de intensificación de la protesta, a partir de finales de 1996, hemos experimentado varios momentos de una poderosa unanimidad opositora, intercalados, empero, de latencias que no se tradujeron en movilización efectiva, y en las que predominó la fragmentación. Es en su contexto que se ha tornado posible la instauración, por ejemplo, del sistema de dolarización. En todo caso, durante la segunda mitad de los años noventa hasta el inicio de la gestión de Lucio Gutiérrez lo que se ha mantenido es un efecto de resistencia a las realizaciones extremas por las que ha pugnado la derecha política y económica, que a partir de 2003 y sobre todo el 2004 se ha lanzado a coronar con broche de oro el proceso de liberalización e inserción en la economía “globalizada” mediante las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio.

El ciclo de resistencia, entonces, parece haber terminado, mientras la contestación se empantana en acciones de tipo táctico, de preservación de los márgenes económico-sociales impuestos por el Estado neoliberal para la sobrevivencia, como cuando los servidores públicos, en el 2004, se ven obligados a protestar por el incumplimiento –por falta de presupuesto– de la Ley de Homologación y Unificación Salarial, que da al traste con las conquistas laborales de décadas anteriores.

En la década de los noventa, muchas perspectivas sobre la protesta (académicas, políticas y mediáticas) han recalcado el predominio de lo identitario “post-clasista”, reproduciendo el esquematismo secuencial y dicotómico que contrapone los “nuevos actores sociales” a los “actores sociales tradicionales”, por una parte, y reifica la presencia de lo “identitario”/ “expresivo” por sobre lo “clasista”/ “instrumental”.

¿Cómo miramos los procesos de fin de siglo en el Ecuador, al posicionarnos en el siglo XXI y desde la experiencia de la reconfiguración radical del campo político-ideológico y de la avanzada del modelo de ajuste? ¿Cómo se constituyeron los sujetos políticos que confluyeron en la vertiente de la protesta, concretamente durante la segunda mitad de los noventa? Hemos intentado responder a estas cuestiones recuperando las voces de los dirigentes intermedios y de los miembros de base en tres vertientes de la protesta de fin de siglo en nuestro país. La reflexión sobre sus testimonios, en articulación con los contextos en los que se dotan de sentido, nos abre una puerta a la pluralidad de perspectivas que orientan la protesta. Pluralidad que es opacada tras una aparente unanimidad de sentidos políticos, no siendo esta otra cosa sino los espacios semánticos donde es posible un acuerdo, y que frecuentemente coincide con los pronunciamientos de los liderazgos nacionales. Hemos visto, pues, que los contenidos de la protesta han rebasado los tópicos de la diferencia y la plurinacionalidad, en el caso de los campesinos-indígenas; de la retórica revolucionaria, en el caso

de la juventud estudiantil, y de las demandas estadofóbicas y de la mera reivindicación economicista, en el caso de los sindicalistas.

Así, los sentidos de la protesta, a nivel de los mandos intermedios, están constituidos ciertamente por estos elementos, pero a ellos se le superponen sentidos clasistas que desembocan en acciones beligerantes a partir de percepciones sobre lo que se considera moralmente intolerable. Revisemos brevemente los procesos de constitución de las identidades políticas, en los diversos segmentos sociales movilizados desde 1996.

### **IDENTIDADES POLÍTICAS CAMPESINO-INDÍGENAS**

Para evaluar la significación de la movilización indígena de los últimos años del siglo XX, así como las identidades de la protesta, es conveniente hacerlo a partir de dos elementos básicos. El primero de ellos, es el tema del proyecto de plurinacionalidad; y, como segunda cuestión, el tema del entrecruzamiento de condición de clase con la condición étnica.

En la perspectiva de Dávalos (2003), la movilización indígena de los últimos años, realizada bajo la consigna de la plurinacionalidad, tendría un sentido reivindicativo distinto al de la pluriculturalidad o de meras demandas etnicistas, proyectándose a la demanda del ejercicio de derechos –en particular sociales– para todo el espectro sociocultural de la población. Es preciso reconocer que el proyecto de la plurinacionalidad ha sido uno de los proyectos políticos más importantes de los últimos años. Pero, ¿en qué medida recoge toda la polifonía política, social y regional? Asumo que el criterio cardinal de discernimiento sobre su validez para la construcción de la justicia social sería su capacidad de proponer y generar alternativas tanto frente a la discriminación cultural, racial y sexual, así como a la explotación y el despojo de carácter socio-económico. Se trataría, como alertaba ya hace varios años Nancy Fraser, de que no se suplante el tema de la explotación por el de la dominación cultural, así como de que el reconocimiento cultural no desplace a la redistribución socioeconómica como remedio a la injusticia (Fraser, 1997: 17).

El momento estelar de la movilización indígena pareció dar cuenta de esta necesidad, a través del lema: “Nada sólo para los indios”, y de ahí se derivaría su capacidad de interpelación a la sociedad en un momento en que arrecia la tormenta del ajuste; es así que hoy en día la utopía de la pluriacionalidad estaría vigente, a pesar del desencuentro de algunos líderes con su propia historia.

Empero, el tema de la plurinacionalidad ha emergido simultáneamente con la búsqueda de apagar el “incendio” campesino-clasista, coincidiendo con el proyecto de eliminación de la reforma agraria. Han fluido, como todos y todas sabemos, ingentes recursos económicos uti-

lizados en el fomento del desarrollo local, con los que se ha pretendido “incluir” a amplios sectores del campesinado indígena al goce de la ciudadanía. Múltiples testimonios de los destinatarios de tales recursos y proyectos han anotado la ineficacia de los mismos para lograr ese objetivo; y al parecer esto tampoco ha generado en la mayoría de tales sectores una sensación de “inclusión”, y de acceso a derechos y servicios modernos. Por otra parte, como es también ampliamente conocido, la aplicación de proyectos locales a través de las ONG ha llevado al despliegue de clientelas de las financieras internacionales y al surgimiento de un estilo de vida afincado en tales recursos y propuestas. Sospecho que la existencia de tales clientelas y gestores de recursos, a la par que contribuyen a apagar “incendios” sociales localizados, empalma de lleno con lo que, siguiendo a Rojas, denominaré las “subjetividades de la pobreza”, subjetividades fracturadas que al buscar vías de acceso a la modernidad a través de tales proyectos, a la larga se encuentran sometidos “a la férrea lógica de la reproducción ampliada del capital” (Rojas, 2001: 58).

La primera y obvia sugerencia que de aquí se deriva es que es menester superar estilos cortoplacistas y localizados, para desarrollar propuestas políticas, sociales y económicas de aliento nacional y latinoamericano. La segunda sugerencia gira en torno a la forma ideológica de concreción del localismo y la diferencia. En torno a este tema, la antropóloga argentina Rita Segato indica que la adopción del lema norteamericano para la constitución de diferencias, si bien coadyuvaría a la afirmación de los derechos étnicos y el acceso a recursos, entrañaría varios riesgos políticos, puesto que “[...] lo que es reclamable, lo que es deseable también llega definido como finalidad impuesta”. Ello entrañaría una pérdida de perspectiva de la finalidad de los recursos y con ella, la propia posibilidad de “contracultura, de contestación a partir de la experiencia histórica”<sup>2</sup> (Segato, 1999: 190).

La despolitización del concepto de “plurinacionalidad” que se opera cuando se exagera el tópico de la diferencia, así como la pérdida de la lógica “amigo-enemigo”, han condenado a los sujetos a un empan-

---

<sup>2</sup> El análisis de Segato explica acertadamente el carácter de las relaciones de la dirigencia indígena con las ONG transnacionales hacia fines de los años noventa, por lo que vale la pena transcribirlo: “[...] el beneficio de introducir estas identidades políticas [pautadas por los modelos transnacionales] consiste en que, a partir de la pertenencia a grupos así marcados es posible reclamar acceso a recursos y garantías de derechos. Pero el precio a pagar por esta conquista es alto: [...] lo que es reclamable, lo que es deseable también llega definido como una finalidad impuesta. En este proceso de pérdida de la memoria de las finalidades alternativas, podemos venir a depararnos con mujeres aspirando a ser generales o negros imaginando fórmulas para maximizar la plusvalía de sus subordinados, pues toda idea de contracultura, de contestación a partir de la experiencia histórica de pueblos se pierde [...]” (Segato, 1999: 190-191).

tanamiento en la táctica, en el accionar en el terreno del adversario, en el escamoteo en torno a lo social en base de recursos destinados a la producción de “gobernabilidad”. Afortunadamente, el “crimen” no es perfecto, y tarde o temprano termina revelándose la incapacidad de las apuestas localizadas para generar una igualdad sustantiva y una ciudadanía social y política, en la medida en que los magros beneficios arrojados por tal “acceso a recursos” acaban arrasados por la “férrea lógica de la reproducción ampliada del capital”.

En lo relativo a la segunda cuestión, la emergencia del sujeto indígena sugirió en su momento la imposibilidad de pensar el problema del campesinado ecuatoriano, o al menos de grandes segmentos del mismo, únicamente en su dimensión de clase. Pero tampoco es viable la exacerbación de la diferencia, pues encasilla la reflexión y las acciones políticas en la dicotomía “clase/etnia”. Cabe aceptar que, si bien es cierto que en el transcurso de los años noventa se ha acentuado la constitución de sectores urbanos indígenas de ingresos medios enmarcados justamente en la reivindicación de su singularidad cultural como respuesta a la discriminación experimentada, también es cierto que grandes contingentes indígenas mantienen su vinculación con el campo, donde se viven cotidianamente las consecuencias tanto de los límites de la reforma agraria, como los impactos de la contrarreforma, así como el desentendimiento del Estado frente a la problemática agraria. Es verdad, igualmente, que la migración hacia la ciudad en pos de un porvenir digno no se ha plasmado para la mayoría de los/as indígenas campesinos/as que efectivamente han migrado en busca de la anhelada ciudadanía social. De tal manera que, junto con la demanda de ciudadanía social vivamente expresada sobre todo en los últimos levantamientos indígenas, sigue estando vigente el tema de las condiciones de la producción agropecuaria, al igual que un examen crítico de lo acontecido a partir de la “contrarreforma agraria de 1994”, en lo relativo a la tenencia y el mercado de tierras.

Dicho de otro modo, el afianzamiento de un sector social en tanto “diferente” no ha conllevado a la supresión de los referentes campesinos de las identidades políticas (en la acepción dada en el Capítulo II). Y esta observación es válida tanto para los sectores del campesinado azuayo, inmersos en la problemática campo-ciudad (que es a la vez expresión de una confrontación étnico-política, en cuyos pliegues germina una búsqueda de etnicización) como del cotopaxense, más claramente definido en el sentido de las orientaciones étnicas. Es, en todo caso, precisamente esta multidimensionalidad y conjugación de lo étnico con lo popular –plasmadas en el lema “Nada sólo para los indios”, y sostenidas en la movilización de las bases de la CONAIE– lo que ha logrado una interpelación del conjunto de la sociedad.

Finalmente, en el caso del campesinado azuayo, la emigración, como respuesta a la inveterada crisis social agudizada por la estructura minifundista, ha configurado la despolitización de las identidades, en la medida que se constituye una alternativa que drena el conflicto agrario e inhibe la demanda al Estado de políticas de apoyo a la producción agropecuaria, tales como el crédito, la transferencia de tecnología, de capacitación, de garantía a la tenencia efectiva de la tierra, entre otros. Mayor visibilidad, en este segmento, ha tenido la movilización del Seguro Social Campesino, orientada a defender la asistencia de salud. Urgiría, en este sentido, la repolitización de la agenda local y las acciones, levantando alternativas tales como las prácticas cooperativas y la demanda de condiciones para la producción. En todo caso, la repolitización de las identidades en este segmento socio-geográfico encuentra un severo obstáculo en los procesos de hibridación que ocurren a merced del contacto cultural de los emigrantes, de los beneficios económicos y, sobre todo, simbólicos que ofrecen las remesas y el acceso al consumo suntuario. Las carencias analíticas indican que es inaplazable, asimismo, la investigación sobre los procesos locales de la tenencia de la tierra, del mercado de tierras y la relación del fenómeno migratorio con estos procesos, como insumo para una agenda del cambio, y para configurar una mirada problemática de alcance nacional sobre lo local.

### **LAS IDENTIDADES POLÍTICAS ESTUDIANTILES**

En el seno de este sector social encontramos fenómenos políticos contradictorios, indicativos, quizá, de nuevas formaciones ideológicas, así como de un replanteamiento de los referentes políticos. Está debilitado el referente político-partidario de corte izquierdista-revolucionario previo. Probablemente, se deba a esto la fragmentación de la expresión pública de este sector que no solamente no aparece como la manifestación unánime de oposición a las políticas de Estado y de gobierno, sino que por momentos asume perfiles espontaneístas, sin demandas ni acciones críticas claras. Por momentos, parece un caminar sin rumbo.

Empero, tras esta superficie de aparente caos, constatamos que, lejos de una apoliticidad proclamada por las corrientes académicas del “desencanto”, la juventud estudiantil manifiesta tanto una crítica antisistémica, como un alineamiento de defensa a las instituciones. Todo, menos una apatía frente al acontecer político y social. En todo caso, asistimos a una diversificación de las demandas. Una mirada más cuidadosa revela también una gran capacidad de generar organización, de innovarla en formas inéditas; por ejemplo, a través de redes de jóvenes o de una multiplicidad de grupos localizados de “formalización intermedia” que han retomado discursos de cuestionamiento antisistémico, tales como los agrupaciones de simpatizantes del Partido

de los Trabajadores del Brasil o de seguidores del ideario comunista y socialista.

En los sectores estudiantiles críticos, las identidades políticas se han constituido en torno a dos ejes. El primero, la necesidad de resguardar la continuidad de su “inclusión”, el goce de derechos a la educación, a la salud y en el futuro al ejercicio profesional. Es decir, sus identidades se construirían a partir de “actos de enclasmiento” orientados a reafirmar el sentido de su presencia social. Sus discursos, siendo portadores de un carácter popular-universalista, se proyectan a la reafirmación de su propia condición de ejercicio de derechos sociales. En segundo lugar, para las nuevas expresiones políticas estudiantiles es fundamental la propia posibilidad de pensarse en términos colectivos, expresada en clave de pertenencia nacional, y la traducción de la ética de la solidaridad en reivindicaciones y plataformas políticas; así como una búsqueda de reencantamiento de la política, que desemboca en nuevas comprensiones de los estilos de trabajo, que ya no admiten rigideces formalizantes, sino que buscan la plasticidad del lenguaje y las imágenes.

La repolitización de la movilización estudiantil demandaría, por otro lado, una proyección del discurso en torno al derecho a la educación como aspiración para una amplia gama de jóvenes que han perdido el derecho a ella, pero también de reivindicaciones específicas que expresen los requerimientos de miembros de clubes barriales, grupos juveniles, etcétera. Se torna necesario también, en ese sentido, la ampliación del núcleo interpelatorio del discurso hacia la reivindicación de empleo, dadas las dificultades de inserción laboral para los/las jóvenes, profesionales o no. Se trata pues de rebasar el estrecho marco de la protesta “movimientista”, dando cuenta de la polivalencia de las transformaciones sociales, en el contexto del ajuste, así como de las circunstancias concretas del ejercicio de los derechos sociales.

### **LAS IDENTIDADES POLÍTICAS OBRERO-SINDICALES**

Para esta vertiente de la protesta, la década de los años noventa fue una temporalidad de quiebre en varios sentidos. Primero, con la caída del bloque socialista se perdió un referente orientador de las luchas políticas de una parcela significativa de este sector social. Segundo, la reestructuración de las relaciones capital-trabajo, modeladas ahora por la legislación laboral vigente, que contempla figuras socio-jurídicas que conducen a la precarización del trabajo, tales como la flexibilización y tercerización de la fuerza laboral. Tercero, el sujeto laboral se vio abocado a un déficit simbólico proveniente, menos de una ausencia de acciones políticas y reivindicativas que de una “hiperpoliticidad” y actuación táctica en torno al Estado, de una falta de perspectiva sobre



su imagen social, como de una estrategia de invisibilización y desprestigio, desde los medios de comunicación y el Estado. El sujeto derrotado, despojado ya del halo heroico de antaño, continúa ubicado, no obstante, en el espacio de un antagonismo fundamental: entre el capital, ahora globalizado, y el trabajo, que se encuentra circunscripto local y nacionalmente, aunque sujeto a las decisiones políticas y económicas gestadas allende las fronteras de los Estados nacionales.

La derrota política de los años noventa y la fragmentación organizativa que a ella ha seguido han puesto en suspenso y fracturados las identidades clasistas de algunos sectores, además de destituirlos de condiciones para una acción de orden estratégico, para una recomposición organizativa, política y simbólica emanada de sus propias necesidades históricas. Entonces, si para otros sectores sociales la ideología de la protesta estaría impregnada de las “subjetividades de la pobreza”, aquí se caracterizaría por las “subjetividades de la derrota”.

Los/las antiguos sindicalistas sostuvieron un discurso y unas acciones que, siendo calificadas de “economicistas” han sido, sin embargo, claves para la preservación de condiciones básicas de sobrevivencia de amplias capas sociales. Por otro lado, en gran medida este sector permanece anclado en evocaciones pasadistas, sin lograr rebasar la vinculación umbilical con el Estado en tanto interlocutor, y al mismo tiempo postergado por este en esos términos. Aquí, la esencialización de la identidad obrero-sindical no daría cuenta de la complejización de la clase trabajadora durante las últimas décadas. En efecto, como sostiene Antunes, la crisis de los sindicatos no significaría en absoluto la desaparición de la clase trabajadora; lo que estaría ocurriendo es un proceso de heterogenización, fragmentación y complejización de la misma, expresadas en la existencia de un numeroso subproletariado (bajo las formas de trabajo precario, parcial, temporario, subcontratado, “tercerizado”), y del crecimiento del sector de servicios (Antunes, 2001).

La recuperación de la presencia social y política de este sector pasaría, pues, por dar cuenta de las nuevas circunstancias históricas del trabajo, en lo que se refiere a los procesos productivos, así como de la creación de relatos colectivos abarcativos para todos estos tipos de trabajadores/as, incluidos los/as desocupados/as y quienes han debido marchar al exilio económico en busca de la sobrevivencia. Estas nuevas perspectivas serían la condición discursiva mínima para la recomposición de lo que hoy son las “subjetividades de la derrota”.

Probablemente las dificultades para una mayor capacidad de interpelación, de cara a la sociedad, sobre todo en el caso de los trabajadores y los estudiantes, se deba, asimismo, a las resistencias de ciertas instancias organizativas a la democratización de las estructuras de dirección, por ejemplo, desde criterios de género (y se torna cada vez más

necesaria, además, una democratización que deconstruya la homofobia y la discriminación por orientación sexual). El déficit político-simbólico tendría lugar también debido a las limitaciones para asumir orgánica y discursivamente la complejización de la reivindicación en torno al trabajo que, según la propuesta de Vakaloulis, pertenece a un espacio social más amplio que es a la vez laboral (relacionado al trabajo asalariado), popular (relación a las jerarquías sociales) y dominado (relación al poder económico y político) (Vakaloulis, 1999).

El reconocimiento de tal complejidad y el planteamiento de estrategias de comunicación, junto el llamamiento a la pluralidad de sujetos vinculados de una u otra manera a la problemática del trabajo, podrían estar en la base de la ruptura del aislamiento de los sindicatos frente a la sociedad, de la superación, como señala Antunes (2001), de la barrera social que separa a los trabajadores “estables” vinculados al proceso productivo (en retroceso numérico) de los trabajadores a tiempo parcial, tercerizados, informales. En el caso ecuatoriano un elemento central sería sobre todo la reivindicación del empleo y la organización de los desocupados, elemento sublimado con la emigración. Desde luego, una tarea como esta no podrá ser acometida desde los espacios y demandas sectorializadas, sino solamente desde una instancia política plural, unificada y democrática, aún inexistente.

### **DESFACIENDO ENTUERTOS**

Una especial consideración merece aquí el tema de la hegemonía, cuyo suelo ideológico se encuentra constituido por las subjetividades de la pobreza y de la derrota. Como habíamos mencionado al inicio, la opacidad de algunos sujetos sociales durante los años noventa responde más a la exitosa estrategia del Estado y las elites dominantes –sostenida por los grandes medios de comunicación– que a la inactividad en sí misma o la desaparición de tales sectores, pues lo fragmentado de su accionar no ha significado *per se* su muerte social. Se trata de estrategias basadas ora en la obliteración, ora en la sustitución de íconos, ora en la sobreexposición sesgada; procedimientos que han contribuido a crear consensos adversos a las fuerzas políticas y sociales críticas. En tal virtud, se torna imprescindible, para cada uno de estos sectores, construir símbolos y enunciados amplios que interpelen, más allá de las fronteras de la organización, a los grupos interesados en una reivindicación específica: sea el salario, la educación u otras (hemos hablado, en concreto, de la complejidad de la clase trabajadora, o de la juventud estudiantil, o de los sectores indígenas-campesinos y/o productores rurales). Se trata, en definitiva de la posibilidad de producción de contrahegemonía de cara a la sociedad (básicamente exitosa en el caso del movimiento indígena, con todo el simbolismo y la ritualidad desple-

gados, sobre todo en los últimos años, bastante limitada en el caso del movimiento sindical, intuida en 1995 con el encadenamiento al oleoducto y jamás recapitulada). Contrahegemonía que no solamente se afinque en la elaboración de un “elemento derivado” propio (que pase, entre otras cosas, por la politización de tópicos compartidos, como es el tema del combate a la corrupción), sino también en estrategias de resistencia frente al *modus operandi* del neoliberalismo, que contrarresten la generación de consensos ideológicos adversos que aíslan a los sectores contestatarios, al mismo tiempo que el Estado los suprime en tanto interlocutores.

Tales tareas serían posibles solamente en virtud de la existencia de políticas de la comunicación y de producción ideológica. Las mismas deberían considerar tres momentos. El primero, orientado a contrarrestar el juego hegemónico del Estado. El segundo, dirigido a la incidencia en las representaciones que la sociedad elabora sobre la presencia social y política de las fuerzas organizadas; y el tercero, que tenga como destinatarios a sus propias bases. Trabajo que requiere de la misma sofisticación con la que opera “el orden del discurso”. De lo que hablamos, en definitiva, es de la necesidad de anticiparse a los hechos contrarrestando cooptaciones emocionales y culturales masivas; de prevenirse de aquellos discursos que, como analizaba Foucault, circulan reprimiendo e induciendo placer.

Por otro lado, considero que el concepto de “diversidad”, promocionado durante los años noventa, ha sido convertido en un cliché que apuntala la hegemonía. El uso reiterado de ese término para la caracterización de lo social y lo político tiene un correlato histórico concreto, pues se trata, nada menos, que de un término vinculado a la expansión global imperial de la última década del siglo XX. Según Rita Segato, la constitución de identidades políticas en los últimos años habría estado relacionada con procesos de “inoculación de la diversidad”, de transnacionalización de las identidades étnicas, es decir de implementación de mandatos étnicos a imagen y semejanza del modelo multicultural norteamericano, basado en el segregacionismo, y asentado en una concepción esencialista de las identidades; bajo tal modelo el acceso a los derechos se daría en tanto parte de una u otra parcialidad étnica. Según esta misma autora, en el contexto de los países latinoamericanos, la implementación de tal modelo de sociedad redundaría en el “empobrecimiento de la diferencia”, homogeneizando la forma de constituirse en tal. La constitución de identidades, de esa manera, se vería fetichizada, reducida a puros signos, vaciada de su contenido histórico, en la medida que su política se ha regido por los nuevos parámetros de prestigio de

“lo moderno”: lo étnico<sup>3</sup>. Distanciada, por lo mismo, de la experiencia étnica local (Segato, 1999); y, si actualizásemos estas tesis para el caso que nos ocupa, agregaríamos que fetichizada, al verse reducida a los signos de lo étnico “químicamente” puro, lo juvenil juvenilizado.

Un elemento decisivo para la recuperación política sería la producción de referentes discursivos para las identidades plurales cobijadas por cada uno de los antagonismos contemporáneos. En ese sentido, la elaboración de relatos colectivos estaría pautada por la conciencia sobre el espesor político-conceptual de los contenidos. Desde estas perspectivas, de lo que se trataría es de la suspensión del compromiso de la idea de “diversidad” con políticas de la identidad que desconocen la profundidad histórica de lo plural, a fin de que las singularidades emergentes, al calor de relatos sociales y antagonismos políticos, no se vean reducidos a la aridez de sus signos elementales y conminadas a un deambular político sin propuesta ni perspectiva. Entonces, al hablar de cobijar en discursos amplios las búsquedas políticas de los complejos sujetos sociales, de lo que se trata es de reconocer la polivocidad social e histórica, y este hecho debe traducirse en relatos políticos y en propuestas de sociedad que permitan argumentar mejor las posiciones de cada polo de la contestación, aunque sin perder de vista los referentes universales que servirían de plataforma común, en aras de una lucha política productiva y eficaz.

Y es urgente, hoy en día, la recuperación de las identidades cuestionadoras y propositivas, su re-visibilización y reunificación, junto con un trazado de las metas políticas, que esta vez deberá ser de tipo estratégico, pues la actual arremetida discursivo-mediática ha construido una realidad virtual con centro en las discordias por las instituciones y el Estado liberal de derecho, colocando a la opinión pública ante la falsa disyuntiva “democracia (liberal, claro) / dictadura”, obscureciendo la pluralidad de demandas políticas, tales como la oposición al Tratado de Libre Comercio, o las exigencias de ciudadanía social de múltiples sectores. Es decir, se estaría operando un nuevo secuestro del sentido al desvirtuar lo profundo –a pesar de todo– de la crítica de la protesta de los años noventa, secuestrando, asimismo, los espacios de expresión tradicionalmente populares: las calles, vaciando a “la política de la calle” de contenidos impugnatorios al modelo político hoy vigente.

---

3 Segato observa también los efectos del transplante de “lo moderno” a nuestras sociedades sin mediaciones de procesos de “digestión” y validación en tanto bienes substantivos: “De nuestro lado, del lado de los países con poca concentración de este tipo de bienes [modernos] [...] más que como tal conjunto de bienes materiales y filosóficos substantivos, la modernidad del lado de acá, tiende a ser percibida como un conjunto de signos de prestigio [...] y no como contribuciones a la cualidad de la vida [...] lo que afirmo es que [tales bienes] aquí [son] mero signo, emblema, fetiche” (Segato, 1999: 170-171).

Felizmente, podemos celebrar la complejidad de lo social que en estas páginas ha sido iluminada desde las palabras de los dirigentes medios y de participantes rasos de la movilización de fin de siglo. Ellos y ellas nos enseñan que lo que se dice en las cúpulas no es lo que se siente fuera de ellas, pues la palabra intermedia, si bien está alentada frecuentemente por las evaluaciones morales que, oriundas de la cotidianidad, contribuyen a despolitizar la contestación, iluminan también la relevancia de la textura clasista de las grupalidades “identitarias”, a despecho de discursos que en el siglo XXI van quedado obsoletos, una vez que estamos consiguiendo “desfacer” los entuertos hegemónicos de los años noventa.